

---

# CENTROAMÉRICA: RIESGOS Y DESAFÍOS A LA LUZ DEL IV INFORME ESTADO DE LA REGIÓN\*

## PROYECTO ESTADO DE LA REGIÓN\*\*

---

### **PALABRAS CLAVE**

*Centroamérica; Desarrollo Humano; Exclusión social; Democracia; Estado; Poder Infraestructura; Acuerdos políticos.*

### **RESUMEN**

*El presente artículo plantea los principales riesgos y desafíos de Centroamérica, a la luz del IV Informe Estado de la Región (2011). El artículo destaca que pese a los malos tiempos la región en el trienio 2008-2011, continuó exhibiendo avances, si bien limitados, que muestran que no se reeditó una nueva década perdida como la de los años 80, pero que el riesgo continúa y exige una combinación de tareas nacionales (fortalecer la capacidad de los Estados) y potenciar la colaboración regional para asumir apremiantes desafíos comunes.*

### **ABSTRACT**

*Based on the Fourth Report on/of the State of the Region (2011), this article identifies the main risks and challenges that Central*

---

\* Este artículo tiene como base principal el capítulo I del Informe Estado de la Región sobre Desarrollo Sostenible.

\*\* El proyecto Estado de la Región es una de las plataformas de investigación y análisis especializada en el desarrollo humano sostenible en Centroamérica, que forma parte del Programa Estado de la Nación, fundado en el año 1994 y que, actualmente, se ejecuta en el marco del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica.

*America is facing. This article argues that despite a difficult economic context between 2008-2010, the Central American region continued showing progress, thus avoiding another “lost decade” as experienced in the 1980’s. However, a number of risks remain and require the implementation of national initiatives (aimed at strengthening state capacity) and a closer regional collaboration (in order to deal with pressing shared challenges).*

## RÉSUMÉ

*En s’inspirant du Quatrième Rapport de l’État de la Région (2011), cet article présente les risques et défis principaux auxquels fait face l’Amérique centrale. Cet article soutient que, malgré la conjoncture économique difficile des dernières années, l’Amérique centrale a continué de progresser, évitant ainsi un scénario de “décennie perdue”. Cependant, des risques importants subsistent et exigent la mise en oeuvre d’efforts nationaux (afin d’accroître la capacité des États) et une plus étroite collaboration régionale entre les pays de l’isthme interétatique (afin de trouver rapidement solution aux défis communs).*

A comienzos de la segunda década del siglo XXI, Centroamérica<sup>1</sup> enfrenta uno de los momentos más complicados en los últimos 25 años. La pacificación, apertura democrática y económica que supuso la firma del Acuerdo de Esquipulas (1987), promovió importantes réditos al interior de cada uno de los países, pero la magnitud de los rezagos así como las amenazas mantienen a la región en situación de alto riesgo, sin que se advierta un cambio sustantivo en la dirección de las políticas públicas.

No se trata ya solo de una pérdida de dinamismo de los avances societales, sino que en los últimos años se han presentado varios retrocesos y signos de una posible fractura regional, pese a que han aumentado las capacidades de los países del istmo para enfrentar episodios de crisis.

El lastre más significativo que enfrenta Centroamérica es la persistencia de altos niveles de exclusión social, en particular afecta a los países del centro

---

1. Para los efectos de este artículo se entiende a Centroamérica como el territorio (521 mil kms<sup>2</sup>) dividido en siete países (Guatemala, Belice, El Salvador Honduras, Nicaragua y Panamá). En términos de población, se estimaba que en 2010 la región contaba con 43 millones de habitantes.

y sur de la región –Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua donde habita el 80% de la población del istmo. Estos países se caracterizan por: frágiles sistemas políticos y Estados de derecho, inserción precaria en la economía internacional y por una alta dependencia de las remesas enviadas por sus migrantes<sup>2</sup>.

Siguiendo el análisis presentado en el IV Informe Estado de la Región, se destaca al trienio 2008-2011 como un periodo turbulento en el que tuvieron lugar retrocesos en varios frentes. Sin embargo, cabe destacar que ningún país ni el área en su conjunto, revivió los escenarios de crisis política y económica experimentados en los años ochenta. El golpe de Estado en Honduras (2009) ha sido, en todo caso, una advertencia peligrosa de lo que puede suceder en otros países con manifiestas debilidades institucionales.

La evidencia permite señalar que en el istmo se continuaron observando progresos, pese a los tiempos difíciles, pero también se registraron preocupantes involuciones que han estirado las brechas inter e intrarregionales. Estos retrocesos no fueron eventos aislados, puesto que derivan de una peligrosa combinación de amenazas y vulnerabilidades. Por su parte, el proceso de integración regional sufrió fuertes presiones que afloraron sus debilidades y limitaron aún más su alcance, como consecuencia de las crisis políticas dentro y entre países.

El peligro de una fractura regional —entendida como la insuficiente disposición de los Estados para actuar en forma coordinada ante retos comunes— puede ser evitada si se profundiza la acción conjunta en áreas estratégicas y, la vez, se robustece la cohesión al interior de los países. Para ambas tareas es esencial el fortalecimiento de los Estados, en tanto plataformas insustituibles para articular procesos incluyentes de desarrollo.

La reciente evolución del desempeño regional resalta hechos que revelan la exposición de la región a amenazas globales que se conjugan con fragilidades construidas a lo largo de décadas. Mientras todavía se arrastran déficits históricos —como los altos niveles de exclusión social y desigualdad— el istmo se ha convertido en el territorio más violento de América Latina y en una de las zonas más inseguras del mundo, con actores del crimen organizado cada vez más fuertes, diversificados y amenazadores; también es la región más expuesta a la incidencia del cambio climático. Asimismo, la alta sensibilidad de la

---

2. En el año 2010, 1 de cada 10 centroamericanos vivía fuera de sus país de origen. En ese año las remesas enviadas por los migrantes equivalían entre un 10 y 20% del PIB en los cuatro países del norte y centro de la región.

región a los shocks económicos externos consumió esfuerzos e, incluso, varios logros alcanzados en años previos y, como saldo, ha quedado en entredicho la solvencia de las arcas públicas.

Los magros resultados del período 2008 a 2011, sin embargo, no revirtieron del todo el progreso registrado en la región durante la primera década del siglo. A pesar de los tiempos difíciles, no se reeditó otra “década perdida” como la de los ochenta del siglo XX. Incluso en medio de fuertes presiones, se reportaron mejoras en la expectativa de vida y siguió bajando la incidencia de la mortalidad infantil, a la vez que creció la cobertura educativa (aunque desde puntos de partida muy disímiles). Si bien quedó en evidencia el ritmo lento y la fragilidad de los progresos —así como la vulnerabilidad de amplios grupos sociales ante la recesión económica—, la región mostró cierta capacidad de respuesta ante amenazas que hacían prever impactos más dramáticos. El gasto social no se comportó, como en otras crisis, de manera procíclica y el mercado común centroamericano ha jugado un papel crucial en la recuperación económica.

Preocupa en todo caso que, pese a las severas dificultades que retan a Centroamérica, ésta ha perdido importancia relativa en el escenario global. Cierzo es que en 2009 se firmó el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, una ventana para afianzar vínculos con esa región. Empero, la crisis económica en Europa y EE.UU. ha afectado flujos de cooperación históricamente claves para la inversión en los países más rezagados. Por otra parte, a diferencia de Sudamérica, la región no tiene vínculos consistentes con las economías emergentes.

## **La peligrosa concurrencia de tres riesgos estratégicos**

El IV Informe Estado de la Región advierte la concurrencia de tres riesgos estratégicos para el presente y futuro de Centroamérica. El primer riesgo es el institucional: hay un tipo de Estado en varios países de la región, marcadamente hostil a la democracia. Son Estados con aparatos institucionales pequeños, redes institucionales precarias, Ejecutivos dominantes, sin contrapesos, ajenos a la transparencia y atrapados por grupos de poder. Este perfil se traslapa con una notable debilidad infraestructural: limitada base fiscal, que impide sufragar el coste de garantizar derechos humanos básicos, y una endeble dotación de recursos y personal que les dificulta una presencia regular en el territorios. Estos Estados pequeños y débiles no son solo incapaces de fortalecer la democracia, sino que desde su seno atentan contra ella. En tal sentido destacan las acciones deliberadas y sistemáticas del

Ejecutivo contra la libertad de prensa y de acceso a la información, intentos para cooptar el Poder Judicial y restringir la independencia de la jurisdicción constitucional, así como la aquiescencia de las autoridades ante la violación de la Carta Magna. Además, en este contexto de fragilidad institucional, el Estado ha sido penetrado en la toma de decisiones por redes corporativistas, aprobadas por ley, que en el balance otorgan más poder a los sectores empresariales.

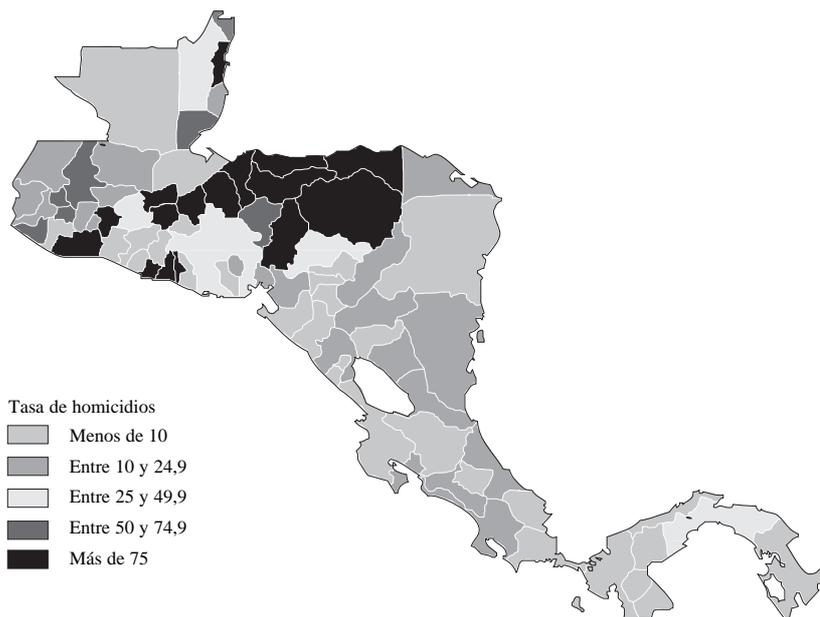
El segundo riesgo es el del cambio climático. Incluso las proyecciones más optimistas —con importantes variaciones entre subregiones y países— señalan que el istmo tendrá que afrontar el aumento de temperaturas y una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos, circunstancia que agravará los problemas que ya sufre la región. Estas nuevas condiciones, aparejadas con la vulnerabilidad social y el aumento de la huella ecológica, se convierten en disparadores del riesgo para la infraestructura, producción y sobrevivencia misma de las personas y especies, en especial de las que habitan los ecosistemas más frágiles. De ahí que la gestión ambiental, orientada con preferencia hacia la adaptación, se convierta en una exigencia de primer orden. Si bien se constata una mayor deliberación política regional sobre el tema, una posición común en el contexto global, así como estrategias, planes y adecuaciones normativas e institucionales, queda largo trecho para la aplicación efectiva de la gestión del riesgo para afrontar el cambio climático.

El tercer riesgo es el del bloqueo político para combatir la exclusión social. El Informe documenta que más de una tercera parte de las y los centroamericanos son víctimas de la exclusión social, en tanto padecen una inserción laboral precaria y sin acceso a programas sociales. Este fenómeno es más pronunciado en los países del centro y norte del istmo que, a su vez, son los que presentan mayores bloqueos a políticas públicas redistributivas. El bloqueo a la inclusión social, al interactuar con otras variables como la alta violencia social (mapa 1), la debilidad de las instituciones, la transición demográfica y el estilo de desarrollo, ponen en grave riesgo la estabilidad futura de la región.

A estos riesgos estratégicos se agrega la incertidumbre ocasionada por las secuelas de la volátil situación económica internacional. Las economías centroamericanas, en diverso grado, están muy abiertas a la economía mundial y son importadoras de petróleo y alimentos básicos. Durante el período de la fuerte expansión internacional (2004-2007), la región fue muy impactada por el deterioro de los términos de intercambio, debido al alza en 2006-2007 de los precios internacionales de aquellos productos.

Estos incrementos de precios causaron presiones inflacionarias y afectaron las balanzas de pagos.

Mapa 1. Tasas de homicidios a nivel departamental\*, 2010 (por 100.000 habitantes)



\* Basado en Banco Mundial, 2011, con base en Cuevas y Demombynes, 2009.  
Fuente: Alfaro, 2011 con datos de Mezdoza, 2011.

La crisis financiera mundial, con epicentro en el 2009, provocó una contracción económica debido a la disminución de los flujos de capital, la caída de las exportaciones y de sectores como el turismo y la construcción (cuadros 1 y 2). Si bien los efectos fueron diferenciados según las condiciones particulares de cada país, ello marcó el curso de las políticas económicas y sociales de los últimos tres años. En el 2010, al pasar la etapa más crítica, casi todos los países del istmo, salvo Panamá, mostraron indicadores macroeconómicos comprometidos. Hoy día la volátil economía internacional provoca nuevos incrementos en la cotización del petróleo y de los alimentos, que podrían recrear el difícil escenario de 2007, con el agravante de que, salvo Panamá, los países con los cuales Centroamérica concentra sus intercambios comerciales y financieros no manifiestan un panorama alentador.

Cuadro 1. Crecimiento promedio del PIB real, por país. 2000-2010

	2000-2003	2004-2007	2008-2010
Belice	7,9	3,8	1,2
Costa Rica	3	6,7	1,9
El Salvador	2,1	3,4	0,1
Guatemala	3,1	4,5	1,9
Honduras	4,2	6,3	1,1
Nicaragua	2,6	4,2	1,5
Panamá	2,4	8,8	6,0

Fuente: Rosales, 2011, con cifras de los bancos centrales de los países.

Cuadro 2. Centroamérica: crecimiento real de los principales sectores en Centroamérica, 2009

	BE	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Agricultura	-5,1	-2,5	-2,2	3,8	-1,7	0	-8,6
Industria	6,9	-2,6	-3,4	-0,9	-7,1	-2,7	-0,3
Construcción	18,8	-5	-0,7	-11,8	-9,8	-4,1	4,6
Comercio y Turismo	-6,7	-5,2	-5,2	-2,1	-8	-2,7	-2,8
Comercio	-7,1	-2,8	-4,8	n.d	-9,5	n.d	-3,7
Turismo	-4,5	-11,3	-7,5	n.d	-1	n.d	2
Sector financiero	n.d	3,9	-5,3	3,8	0,4	-4,3	-2,2
Transporte y Comunicaciones	-2,7	3,3	-3,9	2,8	-4,5	1,8	8,3
Electricidad y Agua	17,1	-1,3	-1,4	1,1	-1,5	2	7,1
Administración Pública	4,1	4,3	1,3	12,8	7	3,3	n.d
Servicios prestados a empresas	n.d	7,1	-3,9	1	1,9	-0,7	-4,6
PIB	0	-1,1	-3,5	0,5	-1,9	-1,5	2,4

Fuente: Rosales, 2010, con base en cifras de los bancos centrales de los países y la CEPAL.

En suma, Centroamérica ha transitado por un período muy difícil entre 2008 y 2011, que la obliga a plantearse cambios profundos. Insistir con las mismas respuestas improvisadas o excluyentes solo llevará a escenarios más inciertos y dramáticos. La buena noticia, dentro de todo, es que aún hay tiempo para hacer algo distinto. Contrario a otros episodios de crisis económica internacional, esta vez los gobiernos centroamericanos tuvieron mayor capacidad de maniobra para paliar ciertos efectos del ciclo recesivo. En lo sustancial, se reitera, hay márgenes para la acción política nacional y regional.

## **La doble y complementaria tarea de fortalecer la capacidad de los Estados y la acción regional**

Según el análisis del IV Informe Estado de la Región, un progreso continuo en los niveles de desarrollo humano requiere articular tareas nacionales —como el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados y la reversión de la captura del Estado por grupos de poder— y la habilitación de mecanismos que favorezcan la acción conjunta entre los países. A escala nacional, acuerdos duraderos e inclusivos ayudarían a dar saltos significativos en la reducción de la exclusión social. En el nivel regional, es preciso identificar y aprovechar espacios para la acción colectiva interestatal. Se presentan cuando menos tres campos de oportunidad para la coordinación de esfuerzos: la reversión de los climas de inseguridad ciudadana, la gestión del riesgo ante el cambio climático y la construcción de una plataforma en infraestructura y logística que facilite la interconexión y aumento de productividad regional<sup>3</sup>.

Ahora bien, sin cambios internos en los países, la acción conjunta y el sistema de integración enfrentan límites sustanciales. La probabilidad de contar con procesos e instituciones de integración eficientes y sostenibles se ve afectada por la existencia, en la mayoría de los países, de Estados endebles y asimétricos.

En Centroamérica el problema estratégico de la integración obedece a que varios de sus Estados, los de los países más grandes y poblados, son institucional y económicamente muy débiles, incapaces de asegurar la vigencia de un Estado democrático de derecho y de suplir bienes como la seguridad ciudadana, la educación y la salud a la mayoría de la población. Sin Estados que cumplan con estos mínimos, con sociedades desarticuladas en su interior, saltos cualitativos en la integración regional no son posibles. En estas condiciones es factible perfeccionar el abordaje conjunto de ciertos temas, pero no lograr cambios fundamentales en el curso y la profundidad de la integración.

Una lección incontestable es que las soluciones deben hacerse con el Estado y no contra o sin él. Empero, ese es el punto neurálgico: los Estados, en su mayoría ineficientes y con escasos recursos, no solo son cada vez más cooptados por grupos particulares, sino que están estancando o revirtiendo su penetración territorial. En el campo de la seguridad, el Estado está perdiendo parcialmente la disputa del control territorial por el avance de las mafias y grupos irregulares

---

3. El desarrollo de una infraestructura estratégica en transporte, energía y telecomunicaciones es clave para una inserción internacional dinámica que eleve el nivel de productividad y encadenamiento de la región, que entre otros impactos eleve la cantidad y la calidad de las inversiones y los puestos de trabajo.

que, principalmente, desde las redes del narcotráfico y actividades conexas, están legitimando una economía subterránea y un clima de violencia en alza. En la medida que el Estado siga perdiendo la capacidad de ejercer el monopolio de la fuerza legítima, y de desplegar su presencia mediante la provisión de bienes y servicios públicos, las sociedades van construyendo estructuras paralelas que, en algunos casos, no solo compiten con el Estado sino que incluso intentan, si se les permite, reducirlo a su mínima expresión. En Centroamérica se constatan problemas de esa índole y, peor aún, el fenómeno tiende a expandirse con rapidez.

En lo que atañe a la acción regional, a pesar de algunos esfuerzos, es preocupante la persistencia de las brechas entre discurso, planes y acciones. Grave también es la posición acomodaticia que parece guiar la actuación de los gobiernos nacionales, en tanto estos prefieren una *integración a la carta*, según convenga o no a sus intereses, con escaso compromiso hacia la región como conjunto. Como resultado, los gobiernos no terminan de impulsar y llevar al terreno una estrategia que, desde una lógica solidaria pero a la vez pragmática, se concentre en los principales desafíos regionales en los que la integración puede aportar un valor agregado, mediante la producción de bienes públicos regionales.

Aun así, el Informe Estado de la Región documenta que bajo circunstancias difíciles, la acción regional conjunta es posible y necesaria. En efecto, en el período 2008-2011, cuando imperaron condiciones adversas para la integración, siguieron desarrollándose esfuerzos conjuntos en áreas de interés para todos los países. Es decir, se redujo pero no se anuló el margen de maniobra. A pesar de las condiciones adversas, la acción centroamericana logró resultados tales como la suscripción del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, la compra conjunta de medicamentos (y su consiguiente ahorro) de los países centroamericanos y República Dominicana, ciertos avances en el Sistema de Interconexión Eléctrica y en la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), la adopción de medidas más efectivas para el control de armas pequeñas y ligeras por medio del Programa Centroamericano de Control de Armas Pequeñas y Ligeras (CASAC), y una mayor y mejor regulación del sector pesquero y acuícola del istmo centroamericano.

## **La democracia electoral no lleva automáticamente a consolidar Estados de derecho**

Las sociedades centroamericanas han transitado por dos décadas de estabilidad política, lo cual ha permitido la creación de marcos normativos institucionales más densos que en cualquier otra época anterior. El régimen político

es el área en la que más se ha avanzado y la regularización de elecciones libres y competidas es la característica más notable.

Esta regularidad sin embargo no debe pasar por alto a los partidos políticos, que aunque siguen siendo vistos como el vehículo privilegiado para obtener representación política, exhiben los niveles más bajos de confianza ciudadana si se les compara con otras instituciones. Tampoco puede dejar de señalarse que subsisten problemas para garantizar un mayor acceso al poder formal, sobre todo por las barreras de entrada que supone el alto costo económico de la actividad política y las barreras que marginan a las mujeres y a los jóvenes de una mejor representación en los órganos de gobierno y legislativos.

Al enfocar el lente para observar el conjunto de los Estados de derecho, las valoraciones cambian sustancialmente, y las buenas noticias se convierten en excepción. Son frecuentes los signos de politización partidaria, de cooptación institucional por grupos extra estatales, de escasa transparencia y rendición de cuentas, junto a presupuestos insuficientes y burocracias con serios problemas para impulsar políticas públicas inclusivas. La esperanza de que la democratización del régimen iba a empujar la democratización de los Estados no se ha cumplido, ni parece que va a concretarse, entre tanto no se redefine la matriz distributiva del poder —que no se reduce a las reglas de juego para la alternancia electoral—, sino que implica la limitación de las elites a la hora de ostentar el poder público.

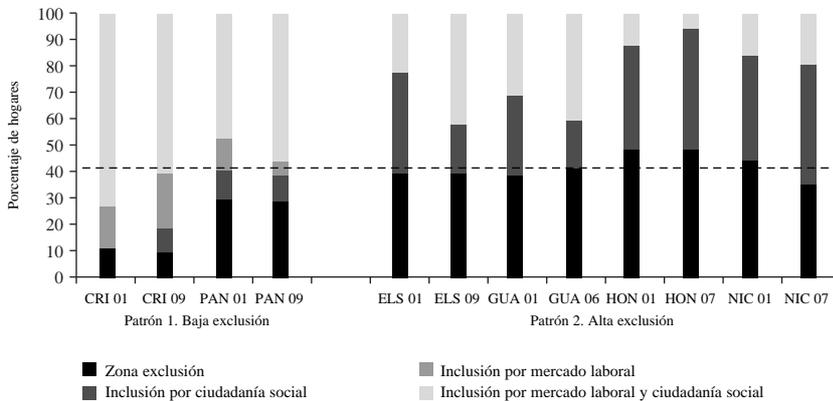
Los propios avances en el régimen político están en riesgo si no se enfilan los esfuerzos hacia el núcleo estatal. Sin Estados que puedan garantizar un piso mínimo e inclusivo de seguridad jurídica, seguridad ciudadana y seguridad social, la democracia como proceso se ve obstruida y corre el riesgo de descarrilarse. Y en el peor de los casos, Estados a la deriva, impotentes, pueden ceder mayor control a grupos particulares que disputan la hegemonía sobre diversas porciones del territorio.

## **Las condiciones requeridas para acuerdos nacionales plurales y duraderos**

A finales de la primera década del siglo XXI, cerca de 3,3 millones de hogares (17,2 millones de personas) en el istmo subsisten en condiciones miserables, con accesos nulos o precarios a los mercados de trabajo y bajísimos niveles de instrucción pública. Esta situación les impide a esas personas —y les impedirá a sus hijos— optar por mejores empleos y acceder a la seguridad social, condenándolos a vivir con exiguos patrimonios, expuestas a muertes

prematuras y a elevados y crónicos riesgos a su integridad. Estos hogares han sido doble y simultáneamente abandonados: por el mercado y por el Estado. Existen notables diferencias en la prevalencia de la exclusión entre y dentro de las naciones centroamericanas. Es claramente menor en los países del sur del Istmo, los de mayor desarrollo humano, y muy extendida en los del centro y el norte: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua (el grupo llamado CA4). Panamá presenta una situación dual: la exclusión es baja en sus zonas urbanas, pero muy alta en las rurales. En los países del CA4, donde reside alrededor del 80% de la población centroamericana, en promedio, cerca de cuatro de cada diez hogares viven en situación de exclusión social (gráfico 1). El problema es más grave en las áreas rurales que en las urbanas.

Gráfico 1. Centroamérica: magnitud de la exclusión y zonas de inclusión social durante primera década del siglo XXI



Fuente: Estado de la Región con base en Pérez-Sáinz, Segura y Fernández, 2010.

La reversión de los altos niveles de exclusión no sería posible recurriendo a más de lo mismo. Es impostergable que la mayoría de los países centroamericanos completen la tarea de construir Estados robustos dotados de poder infraestructural para cumplir sus funciones, facilitar las iniciativas privadas y, con ello, obtener también cuotas altas de legitimidad social. Los actores sociales y políticos tendrían que ser más conscientes de los escenarios por los que podría atravesar la región —que incluye la posibilidad de una nueva factura regional— y asumir el difícil pero ineludible cometido de generar condiciones para que las elites, interpeladas por los movimientos sociales y la opinión pública en general, asuman e impulsen un proceso transaccional que, desde lógicas distintas a la de *suma cero*, haga viable un Estado que esté por encima

del interés de cualquier grupo en particular, pero que a la vez pueda ser interpelado y exigido en cuanto al curso de sus políticas públicas.

Al respecto, el IV Informe Estado de la Región indaga ¿bajo qué condiciones es probable un acuerdo político duradero para disminuir la exclusión social en sociedades muy desiguales, con Estados no democratizados y que sufren una intensa y extendida violencia social?

Para que se dé un acuerdo de esa naturaleza hace falta de que los ciudadanos demanden, que los partidos quieran, que el Estado pueda y que los poderosos no lo impidan. En el análisis prospectivo planteado en el Informe, las probabilidades actuales de un acuerdo político duradero son muy bajas, por lo que el problema de acción colectiva de las elites es un enigma a resolver. Estas parecen aferrarse al viejo orden, pero cada vez ese orden es más incierto y costoso. Tampoco están muy dispuestas a permitir la creación de Estados más representativos de toda la sociedad. De manera que prevalecen pactos subóptimos que perpetúan la exclusión y la segmentación social, sin que el Estado tenga voluntad y recursos para corregir las desigualdades extremas socialmente construidas.

Obtener una disminución significativa y sostenible de los niveles de exclusión social —un salto a la inclusión—, no es posible sin una colaboración entre fuerzas políticas que abra el paso a acciones públicas que amplíen las garantías sociales y fomenten mercados de trabajo más dinámicos. A esta colaboración se denomina “acuerdo político duradero”. Un acuerdo político duradero es una coalición incluyente y horizontal de actores políticos (partidos, movimientos sociales y organizaciones gremiales) configurada a partir de un convenio que establece objetivos, conductas aceptables o al menos toleradas, sanciones para incumplimientos y una distribución equitativa de los costos y beneficios de las acciones convenidas.

Por supuesto que los acuerdos nacionales no serán fáciles ni estarán libres de costos, pero no son imposibles. Constituyen una alternativa frente al deterioro político e institucional que experimentan varios países del istmo. Asimismo, estos acuerdos resultan necesarios para lograr avances en el manejo integrado de bienes públicos regionales, como el patrimonio natural, la estabilidad y la seguridad. En lugar de la inmovilidad, las acciones aisladas o las falsas salidas, en la actual encrucijada parece más sensato reforzar los lazos recíprocos entre la acción política nacional y la regional.

## **Bibliografía**

- Pérez-Sáinz, J. et al.: *Sociedades fracturadas: la exclusión social en Centroamérica*. Ponencia preparada para el Cuarto Informe Estado de la Región. San José, 2010.
- Programa Estado de la Nación. *Cuarto Informe Estado de la Región*. San José, 2011.
- Rosales, J.: *América Central: principales rasgos y tendencias del desempeño productivo y del sector externo en la última década*. Ponencia preparada para el Cuarto Informe Estado de la Región. San José, 2010.